



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: GERMÁN ELÍAS CORREA ÁLVAREZ
Demandado: PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 016 2015 01778 01
Sentencia: S-071

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el día 17 de junio de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

GERMÁN ELÍAS CORREA ÁLVAREZ demandó a PORVENIR S.A., para que una vez se declare que tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, los intereses moratorios y las costas.

HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 22 de octubre de 1967; que estuvo laborando al servicio de COLANTA S.A. entre el 8 de julio de 1991 y el 19 de enero de 2001; que registra aportes a PORVENIR S.A. desde el 1 de noviembre de 1996 al 19 de enero de 2001; que sufrió un accidente el 4 de noviembre de 2002; que en diciembre 23 del mismo año fue diagnosticado con *secuelas de trauma craneoencefálico severo*; y que solicitó a la demandada calificación de pérdida de capacidad laboral sin que a la fecha la entidad le hubiera dado trámite.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, PORVENIR S.A. acepta la fecha de nacimiento del demandante y su afiliación a esa entidad desde 1996, indicando que no le consta lo demás por tratarse de situaciones de carácter personal que deben ser acreditadas en el curso del proceso. Aclara que en varias oportunidades le explicó el mecanismo legal para iniciar el trámite de valoración por invalidez, el cual ha sido omitido sin explicación alguna. Se opuso además a las pretensiones al no haberse dado cumplimiento al debido proceso y no estar acreditados los requisitos de ley para el reconocimiento de la pensión de invalidez. Como excepciones propuso no existe reclamación previa ante PORVENIR S.A., petición antes de tiempo, falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y afectación del sostenimiento financiero del sistema.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 17 de junio de 2022, el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ a PORVENIR S.A. de todas las pretensiones formuladas en su contra por el demandante, a quien

condenó en costas, fijando como agencias en derecho la suma de \$1`000.000.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación manifestando estar inconforme con la decisión en forma total, al resultar claro con las pruebas recaudadas, que le asiste derecho al pago de la pensión de invalidez causada por accidente del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1 de la ley 860 de 2003, ya que se probaron los requisitos para acceder a la misma teniendo en cuenta que a la fecha cuenta con una pérdida de capacidad laboral mayor al 50% según los dictámenes realizados en el trámite del proceso. Solicita se tenga en cuenta la invalidez del demandante que asciende a un 90.57 % de pérdida de capacidad producto de las secuelas luego del accidente.

De otro lado, considera que la fecha a tener en cuenta para efectos del análisis de las semanas de cotización, debe ser el 4 de noviembre de 2002 cuando ocurrió el accidente.

De manera subsidiaria, solicita la aplicación de la condición más beneficiosa debido a su situación de indefensión y debilidad manifiesta. Se debe tener en consideración la sentencia SU 442 de 2016 de la Corte Constitucional y aplicar el Decreto 758 de 1990 que exige acreditar 150 semanas de cotización en los 6 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez o 300 en cualquier época, ya que ambos requisitos se cumplen a cabalidad. También se cumplen los presupuestos de procedibilidad desarrollados por la Corte Constitucional en sentencia SU 556 de 2019 según la cual el principio de la condición más beneficiosa no se restringe a la norma inmediatamente anterior.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, PORVENIR S.A. presentó dentro del término alegatos de conclusión solicitando se confirme la decisión adoptada en primera instancia en la medida que no se cumplen los requisitos para el reconocimiento de la pretendida pensión de invalidez.

CONSIDERACIONES:

A esta altura del proceso, resulta que no es motivo de discusión el estado de invalidez del señor GERMÁN ELÍAS CORREA ÁLVAREZ por superar el porcentaje consagrado por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, así como el origen común de esa invalidez. A esa conclusión se llega luego de apreciar los dictámenes de pérdida de capacidad realizados y que se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Elaborado por el CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO Y SALUD CENDES de la UNIVERSIDAD CES en el mes de marzo de 2019.

En este dictamen se estableció una pérdida de capacidad laboral de 90.57% con fecha de estructuración el 13 de mayo de 2003 determinado por las siguientes deficiencias: i) *Hemiplejia miembro superior izquierdo*; ii) *Deterioro cognitivo por daño axonal difuso*; iii) *Deficiencia por trastorno de postura y marcha*; iv) *Oftalmoplejia interna total unilateral izquierda*; v) *Deficiencias por trastornos de la voz*; y vi) *Ptosis palpebral unilateral*.

2. Elaborado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia el 11 de diciembre de 2020 con ocasión de la objeción que dentro del proceso realizó la parte demandante.

En este se fijó una pérdida de capacidad laboral de 86.34% estructurada el mismo día, 13 de mayo de 2003. Como deficiencias se

incluyeron casi las mismas que en el anterior: i) *Hemiplejía miembro superior izquierdo*; ii) *Hemiparesia espástica de miembro inferior izquierdo*; iii) *Oftalmoplejía ojo izquierdo daño nervios craneales*; iv) *Trastorno de la voz*; y v) *Alteraciones mentales, cognitivas y de la función integradora del cerebro*.

El artículo 39 de la Ley 100 de 1993, vigente para la época en que se produjo el estado de invalidez del demandante, establecía los requisitos para obtener la pensión de invalidez de la siguiente manera:

“Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:

- a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.*
- b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez”.*

Si bien el demandante cotizó a PORVENIR S.A. un total de 509 semanas, lo cierto es que no cumple con los requisitos de la norma citada tal y como se concluyó en primera instancia, si se tiene en cuenta que el último de los aportes efectuados a través del empleador COLANTA S.A. (según se confesó en el hecho segundo de la demanda y de acuerdo al reporte de cotizaciones allegado al expediente), corresponde al ciclo de enero de 2001 cuando se reportó una cotización por 19 días.

Lo anterior significa que, como para el 13 de mayo de 2003 no estaba cotizando al sistema, el demandante debía acreditar un total de 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior, es decir,

entre el 13 de mayo del año 2002 y el 13 de mayo de 2003, tiempo durante el cual no se registra ninguna semana.

Incluso, si se aceptara la solicitud en cuanto a que la fecha a tener en cuenta debe ser la del accidente, ocurrido el 4 de noviembre de 2002, la conclusión sería la misma, pues desde el 4 de noviembre de 2001 hasta ese día tampoco registra cotización alguna.

Ahora, según los alegatos de conclusión presentados en primera instancia y el recurso de apelación contra la sentencia del *a quo*, se advierte que el actor busca, de manera subsidiaria, la aplicación al caso del principio de la condición más beneficiosa que tiene su origen en el artículo 53 de la Constitución, desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, para que, con base en él, se tenga en cuenta lo dispuesto por el Decreto 758 de 1990, el cual establece los requisitos para la pensión de invalidez de origen común en su artículo 6º:

"Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:

- a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido, y*
- b) Haber cotizado para el seguro de invalidez vejez y muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez".*

Dicho principio ha tenido acogida mayoritaria en la jurisprudencia laboral de la Alta Corporación cuando de asuntos atinentes a la seguridad social se trata, específicamente en lo que toca con la definición del derecho a la pensión de invalidez, siempre que se den los presupuestos de cotizaciones exigidas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

En efecto, no sobra recordar la descripción de dicha figura, dada por la doctrina y los pronunciamientos judiciales en el sentido que corresponde a aquella consecuencia jurídica *“Por virtud de la cual las condiciones más favorables que disfrute el trabajador, nacidas de situaciones que surgieron amparadas por la norma que se deroga, serán respetadas y continuarán subsistentes hasta que se extinga la relación determinante”*. (MANUEL ALONSO GARCÍA).

O como aquel principio que *“...supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable que la nueva norma que ha de aplicarse”*. (AMERICO PLA RODRIGUEZ, en cuanto le da la connotación de una regla que forma parte del Principio Protector del Trabajo).

O, en nuestro medio, según lo destaca la Corte Constitucional en el sentido que *“el principio de la condición más beneficiosa hace relación a la aplicación de la norma más favorable siempre que ella pertenezca a la órbita normativa en la que se encuentre inscrito el trabajador”*.

Sin embargo, en el presente caso se presenta una circunstancia que impide el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo este principio constitucional.

Aunque resulte claro que se acreditan más de 300 semanas de cotización durante toda la vida laboral, incluso con anterioridad a la fecha de estructuración, ese total no está acreditado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, época en la que se pueden contabilizar 183.42 semanas según la documental visible en la página 219 del archivo 03ExpedienteDigital, que da cuenta de una vinculación al ISS desde el 24 de septiembre de 1990.

En cambio, el otro requisito, el de las 150 semanas en los últimos 6 años, si bien se cumple contando desde el 1 de abril de 1994 hacia

atrás, para esos efectos es necesario que la invalidez se acredite antes del 1 de abril del año 2000.

Significa lo anterior, que el reconocimiento de la pensión de invalidez no resulta viable cuando el requisito que se invoca es el de las 150 semanas de cotización en los 6 años previos, si la estructuración no ocurrió dentro del límite temporal fijado por la jurisprudencia laboral de 6 años.

Es que la condición más beneficiosa no puede tornarse de aplicación vitalicia o irredimible en el tiempo, o que pueda ser invocada en cualquier época posterior al propio cambio normativo, como en este caso acontece, en el cual, tal tránsito legislativo se dio el 1 de abril de 1994 y la invalidez del demandante se estructuró el 13 de mayo de 2003, esto es, poco más de 9 años después de aquel suceso.

Así se ha señalado, por ejemplo, en sentencias con como la 22.732 del 18 de febrero de 2005, la 24.280 del 5 de julio de 2005, la 28.893 del 4 de diciembre de 2006, la 30.140 del 29 de mayo de 2007, la 33238 del 19 de agosto de 2009, la SL 8097, Rad. 46633 de junio 18 de 2014, o la SL 14091 del 7 de septiembre de 2016, en la que se dijo:

“... frente al otro supuesto referido a una densidad equivalente a 150 semanas, aportadas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, se fijó el criterio que este requisito para efectos de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, cuando la invalidez o el deceso acontece en imperio de la Ley 100 de 1993, según se reclame una pensión de invalidez o una de sobrevivientes, debe cumplirse dentro de los seis (6) años que inmediatamente anteceden a la fecha de vigencia de esta ley (o sea, desde el 1º de abril de 1994, retrospectivamente hasta el 1º de abril de 1988), pero además, es menester que el asegurado también tenga en su haber esa misma densidad de semanas (150) en los seis (6) años que anteceden a la fecha de estructuración

de la invalidez o la muerte, y en el entendido de que ese suceso ocurra antes del 1° de abril de 2000".

Se reitera entonces, no solamente es necesario cumplir con ciertas semanas de cotización, sino que, además, la fecha de la contingencia - la muerte o la invalidez -según sea el caso, no debe exceder el primero de abril del año 2000 o el sexto año de la vigencia de la Ley 100 de 1994 -que es lo mismo-, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y conforme a los requisitos del Decreto 758 de 1990, relacionado con la exigencia de los 6 últimos años para reunir las 150 semanas.

Finalmente, no es de recibo el argumento según el cual debe darse aplicación a sentencias como la SU 446 de 2016 o la SU 556 de 2019, ya que el objetivo en ellas fue permitir la aplicación del Decreto 758 de 1990 acudiendo al principio de la condición más beneficiosa, pero en los casos en que tal estado se ha producido en vigencia de la Ley 860 de 2003, lo que no es posible bajo el criterio de las Corte Suprema de Justicia.

Esa posibilidad no tiene ningún sentido en este caso en tanto la norma aplicable al caso no es la 860 de 2003 sino la Ley 100 de 1993 de modo que no es necesario realizar un "*salto normativo*" para acudir a ella.

Consecuentes con lo anterior, la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada.

Costas en esta instancia a cargo del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$200.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín el día 17 de junio de 2022.

Costas en esta instancia a cargo del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$200.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **39626fd40affbdd249f31a307f8a5ce7f4e0c8fd9d24efec600d32d000badcd6**

Documento generado en 23/03/2023 02:48:36 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>